

Crisis política, no de gestión

LO QUE SE ACABA

discutiendo ya no son SALVADOR CARDÚS | ROS - 17/05/2006

las mejoras que el

Estatut podría

introducir en la gestión

del país, sino las

lealtades

La situación de larga crisis política que vive Catalunya se ha agravado ante los ciudadanos de una manera muy especial por no tener gran cosa que ver con la gobernación del país. Es decir, se ha tratado de una inestabilidad provocada fundamentalmente por luchas de poder que se dirimían al margen de la Administración gubernamental. Ya quedó claro en el anterior cambio de gobierno, y se ha repetido ahora: no se ha echado a ningún miembro -o a casi

ninguno, rectifico- por incompetencia, sino por la necesidad de marcar terreno, es decir, de afirmar la autoridad del presidente o del partido, o por asegurar otros apoyos en menesteres que poco tienen que ver con la gestión diaria de lo público. Y es en esa desconexión radical entre la batalla política y la gestión que el conflicto acaba apareciendo como algo obscuro a los ojos de la gente corriente.

Se trata de una situación muy parecida, desde este punto de vista, a la británica. Tampoco allí existe ninguna alarma especialmente grave en la realización del programa político del nuevo laborismo. Económicamente no existen signos de que se acaben las expectativas de crecimiento y el Gobierno está cumpliendo sus promesas de inversión en educación, sanidad y servicios públicos. Pero Tony Blair está en su momento de popularidad más bajo, que ha provocado un gran revés en las elecciones locales, y el drástico cambio de Gobierno que llevó a cabo la semana pasada tampoco estaba pensado para echar a los incompetentes, sino para afirmar la propia autoridad del presidente, principalmente, dentro del propio partido. Lo prueba que Blair no tuvo inconveniente a dejar dentro del Gobierno precisamente a John Prescott, el ministro más desprestigiado por el escándalo de su relación con su secretaria, y que la mayor parte de los analistas interpreta los cambios en relación con las prisas de su sucesor Gordon Brown para echar lo antes posible a Blair.

En Catalunya, la mayor parte de dificultades del Gobierno tripartito ha venido por cuestiones políticas: desde la entrevista de Carod-Rovira con dirigentes de ETA, pasando por la acusación del cobro de comisiones en los gobiernos anteriores y mil otros conflictos, hasta llegar al debate estatutario. Dejando a parte el accidente del túnel del Carmel, donde la responsabilidad real del actual Gobierno era limitada, por no decir confusa, el resto de problemas se ha situado siempre en la confrontación ideológica, en la discusión del modelo constitucional o estatutario y en las luchas internas o entre partidos para ocupar el poder.

Me parece claro que el Estatut ha sido víctima, también, de esta dinámica. Si se hubiese planteado como un camino para la mejora de la gestión de los futuros gobiernos de Catalunya, todo habría transcurrido con una cierta tranquilidad. Pero el nuevo Estatut se puso al servicio del modelo federal y la España plural; de un cambio de modelo de financiación de alto voltaje político; de una afirmación de soberanismo político que debía expresarse en el reconocimiento de la nación catalana y de sus derechos históricos previos a la Constitución; de una declaración de derechos y deberes tan abstractos como sesgados hacia una determinada concepción del mundo...

Y cuando los equilibrios han estallado, lo que se acaba discutiendo ya no son las mejoras que el Estatut podría introducir en la gestión del país, sino las lealtades, los modelos, las ideologías y el derecho a decidir. Lo que me parece abusivo es que ahora se pida al ciudadano que tenga el *seny* y la prudencia que los principales protagonistas, en su momento, no tuvieron.

Ahora se pide que juzguemos al nuevo Estatut con unos criterios que no son los que los partidos adujeron en sus campañas electorales en el 2003, ni los que han esgrimido durante todo el cruento debate. Probablemente, los catalanes se comportarán con más prudencia de la que se podría esperar. Se votará, sea por el sí, sea por el no, con un sentido de responsabilidad que no se habrá aprendido precisamente de los que nos piden que vayamos a las urnas.

Por otra parte, las campañas por el sí y por el no, lamentablemente, no se van a encontrar, porque no discutirán sobre lo mismo. Inevitablemente, la campaña del sí exigirá un ejercicio de olvido -no sólo de las salidas de tono entre los que ahora van a coincidir, sino de lo que se prometió irresponsablemente que podía ser el Estatut-, mientras que la campaña por el no exigirá poner en acento en el recuerdo de las grandes promesas frustradas, aunque algunos de los que lo pidan también estuvieron muy a punto de olvidarlas. Y, dada la lógica mediática de la política actual, ni que decir tiene que van a tener ventaja los que pidan que se olvide y tendrán desventaja los que quieran hacer memoria: la aceleración informativa a la que está sometida la política actúa como una gran goma de borrar que permite -y obliga a- escribir cada día una nueva teoría interpretativa sin necesidad de grandes coherencias y donde la memoria es un lastre abandonado que es imposible arrastrar.

Insisto en que la crisis del tripartito no ha sido principalmente de gestión, aunque haya tenido algunas áreas francamente deficientes, como también las tenían los gobiernos anteriores. Lo que se ha producido es una crisis de poder causada por la incapacidad de medir exactamente las propias fuerzas y liderarlas y, cosa mucho peor, por consumir las que se tenían para ajustar cuentas internas. Ésa es la gran obscenidad que los resultados del próximo referéndum, sean los que sean, no van a resolver y que la clase política no parece dispuesta a remediar.